



19 de enero de 2026  
JD-01-027-26

**Señores (as)**  
**Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico**  
**Asamblea Legislativa**

Estimados señores y señoras:

Les comunico que la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, en sesión ordinaria 02-26, celebrada el 13 de enero del 2026, tomó el acuerdo en firme que se detalla como sigue:

***“SE ACUERDA 2026-02-018 Se avala el criterio expediente 25.208, “REFORMA DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES LEY N.º 7732 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1997 Y SUS REFORMAS, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 16 BIS, 25, 69 BIS Y 72 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 16 TER Y 69 TER DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO LEY N.º 7786, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”. Diez votos. ACUERDO FIRME. Responsable: Secretaría remitir a la Asamblea Legislativa”.***

Se consigna como sigue:

“Reforma del artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores; reforma de artículos 16 bis, 25, 69 bis y 72 de la Ley N.º 7786; adición de artículos sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva”

## **1. Valoración general del proyecto**

El proyecto se presenta como parte del proceso de actualización normativa exigida por GAFI y por la adecuación institucional impulsada por el ICD, UIF y las superintendencias. La Comisión señala que existe **coherencia internacional** y pertinencia del proyecto (p. 1 y 10).

Sin embargo, también se identifica:

- ausencia de datos empíricos para justificar plenamente el impacto de la reforma (p. 1 y 10),
- redacción compleja con frases muy largas, redundancias y potenciales ambigüedades (p. 10),
- necesidad de mayor claridad sistemática y técnica legislativa.

## **2. ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONTENIDO NORMATIVO**

### **2.1. Artículo 174 – Financiamiento de las superintendencias (p. 2)**

Se plantea que los sujetos obligados bajo la Ley 7786 deberán financiar parte del presupuesto del CONASSIF y las superintendencias.



## Problemas identificados:

1. **Riesgo de doble imposición regulatoria:**  
Empresas ya contribuyentes en el sistema financiero podrían enfrentar cargas duplicadas o crecientes sin criterios de proporcionalidad.
2. **Falta de claridad sobre el cálculo del “canon”:**  
El texto remite a un reglamento futuro, pero no establece criterios mínimos. Esto abre espacios a discrecionalidad y a litigios por violación de seguridad jurídica.
3. **Problema constitucional potencial:**  
Al obligar a sujetos privados a financiar directamente el aparato estatal de supervisión sin un marco tributario claro, podría cuestionarse su naturaleza jurídica (¿tasa?, ¿contribución especial?), lo cual exige precisión legislativa.

## Recomendaciones:

- Definir **criterios mínimos de cálculo** (proporcionalidad, ingreso bruto, tamaño del sujeto obligado).
- Explicitar que el canon constituye una **contribución parafiscal**, regulada conforme a límites constitucionales.

### 2.2. Artículo 16 bis – Creación de la base de datos “Conozca a su Cliente” (pp. 3–4)

La reforma pretende crear una **base de datos centralizada con información de clientes** en SUGEF, accesible a varias autoridades.

## Problemas críticos:

### (a) Riesgos de privacidad y protección de datos (p. 4, inciso h)

El proyecto menciona medidas internas y deberes de confidencialidad, pero NO hace referencia clara a:

- límites de acceso,
- fines específicos,
- cadena de custodia,
- estándares de minimización de datos.

Se corre el riesgo de incompatibilidad con los principios de la Ley 8968 y con los estándares OCDE/GAFI de proporcionalidad.

### (b) Responsabilidad penal amplia (p. 4, inciso g)

Se prevé aplicación del tipo penal de los artículos 196 y 196 bis CP a funcionarios que manejen mal la información.

Esto es correcto, pero puede resultar insuficiente si no se especifican protocolos técnicos mínimos para el manejo de datos.



## (c) Ambigüedad en el acceso institucional (p. 3–5)

Se autoriza acceso a:

- UIF/ICD
- SUGEF
- SUGEVAL
- SUPEN
- SUGESE

Pero sin establecer:

- niveles diferenciados de acceso,
- criterios de riesgo,
- límites de uso.

En su forma actual, la norma podría permitir accesos masivos sin control estricto.

## (d) Riesgo de responsabilidad objetiva para sujetos obligados

El inciso f obliga a actualizar datos bajo amenaza de sanción, pero no distingue:

- culpa leve,
- negligencia simple,
- imposibilidad material.

### Recomendaciones:

- Incluir un artículo autónomo de **protección de datos y proporcionalidad**.
- Exigir **autorización previa y trazabilidad digital obligatoria** para cualquier consulta.
- Establecer un estándar de “**debida diligencia razonable**”, no responsabilidad objetiva.

## 2.3. Artículo 25 y 69 bis – Reportes de operación sospechosa (p. 5)

El texto fortalece el deber de comunicar inmediatamente a la UIF, con prohibición absoluta de informar al cliente.

### Problemas:

1. **Uso del concepto “operación sospechosa” sin criterios objetivos:**  
Esto afecta el principio de legalidad y prevé un riesgo de sancionar decisiones discrecionales.
2. **No establece parámetros claros de “sospecha razonable”:**  
GAFI exige *reasoned suspicion*, no simple intuición.
3. **La prohibición total de comunicación al cliente puede ser desproporcionada**, sobre todo cuando la operación se analizó y se descarta como ilícita.

### Recomendaciones:

- Definir **criterios objetivos de sospecha** basados en tipologías oficiales.
- Incluir salvaguardas para **errores de buena fe**.
- Regular un plazo para **desclasificación** cuando la información deje de ser riesgosa.



## 2.4. Artículo 16 ter – Personas Expuestas Políticamente (PEPs) (pp. 6–8)

Este es el apartado más técnico y extenso. Se introduce un listado considerable de categorías de PEPs.

### Problemas estructurales:

#### (a) Listado demasiado amplio (p. 6–7)

Incluye:

- diputados,
- ministros,
- magistrados,
- funcionarios judiciales,
- embajadores,
- cónsules,
- mandos policiales,
- alcaldes,
- regidores,
- miembros de juntas directivas,
- familiares hasta segundo grado,
- convivientes,
- socios con participación económica,
- cualquier beneficiario final.

El nivel de amplitud puede **sobrecargar el sistema** y generar innumerables “falsos positivos”.

#### (b) No distingue entre PEPs de riesgo alto y bajo

GAFI exige **criterios diferenciados**.

No es lo mismo un magistrado en ejercicio que un regidor suplente o un conviviente de un PEP que nunca ha manejado fondos públicos.

#### (c) Falta de limitación temporal razonable (p. 7)

Para funcionarios comunes, el plazo es “hasta ocho años posteriores a la finalización”.

Para jefes de Estado: “indefinidamente”.

Pueden generar:

- costos operativos excesivos,
- mantenimiento indefinido de categorías sin análisis de riesgo.

#### (d) Problemas con acceso público a la lista (p. 8)

La “lista pública pero de acceso restringido” no establece:



- criterios de acceso,
- procedimientos,
- si debe haber control judicial.

## Recomendaciones:

- Clasificar PEPs en **nivel alto / medio / bajo**, con obligaciones diferenciadas.
- Establecer límite temporal único razonable (ej. 5 años).
- Incluir evaluación dinámica de riesgo.
- Regular acceso mediante **autorización motivada y con registro de auditoría**.

## 2.5. Artículo 69 ter – Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (p. 9)

Introduce un tipo penal administrativo muy amplio.

## Problemas:

- Enumeración demasiado abierta (“por cualquier medio y de manera directa o indirecta”), lo cual puede violar principio de tipicidad.
- No exige dolo específico; podría sancionar negligencias graves como conducta dolosa.
- No distingue actos preparatorios de consumados.

## Recomendaciones:

- Incorporar **elementos normativos específicos**.
- Exigir **intención de contribuir a la proliferación**, acorde con tratados internacionales.
- Delimitar la conducta a actos **idóneos y con riesgo verificable**.

## 3. Análisis de técnica legislativa (p. 10)

La Comisión señala con acierto:

- Frases demasiado largas,
- Incisos extensos,
- Redacción poco clara,
- Ambigüedades y redundancias.

Esto afecta el principio de **accesibilidad y claridad legislativa** (art. 11 CPCA y jurisprudencia constitucional).

## Recomendaciones generales:

- Reescritura con **oraciones cortas**, conceptos definidos y estructura modular.
- Eliminar duplicidades entre artículos.
- Crear definiciones en un artículo inicial (“Glosario”).



## 4. Valoración político-criminal general (p. 10)

Los criterios de política criminal internacional se cumplen.

Pero falta:

- análisis real de impacto,
- estudios sobre carga operativa para sujetos obligados,
- evaluación de costos administrativos,
- evidencia empírica de fallas actuales.

La Comisión también reclama incidencia de datos de UIF, OIJ, Fiscales (p. 10).

## 5. Conclusión general y recomendaciones adicionales

A pesar de su pertinencia, el proyecto requiere ajustes significativos para evitar:

- inseguridad jurídica,
- cargas desproporcionadas,
- responsabilidad objetiva,
- vulneración del derecho a la autodeterminación informativa,
- saturación operativa de la UIF y SUGEF.

**Se recomienda:**

1. **Crear una estructura normativa más sintética y clara.**
2. **Introducir criterios de riesgo en todas las obligaciones.**
3. **Delimitar de forma estricta la categoría de PEPs.**
4. **Regular el acceso y tratamiento de datos conforme a Ley 8968.**
5. **Incorporar estadísticas e impacto cuantitativo en exposición de motivos.**
6. **Revisar proporcionalidad de sanciones y canon de supervisión.**

*Atentamente,*

FABIO ENRIQUE DELGADO HERNANDEZ  
(FIRMA), COSTARICA, OU  
Cédula del firmante: 02-0356-0483,  
Hora y fecha de firma: 21-01-2026, 17:10:24

*Fabio Enrique Delgado Hernández*  
*Secretario Junta Directiva*